PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
XXV LEGISLATURA

COMISIÓN DE JUSTICIA

DICTAMEN NÚMERO 31

EN LO GENERAL: SE APRUEBA LA REFORMA AL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

VOTOS A FAVOR: 18 VOTOS EN CONTRA: 0 ABSTENCIONES: 0
EN LO PARTICULAR: _____

UNA VEZ APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN 31 DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA. LEÍDO POR LA DIPUTADA GLORIA ARCELIA MIRAMONTES PLANTILLAS.

DADO EN EL EDIFICIO DEL PODER LEGISLATIVO, EN SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE XXV LEGISLATURA, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.

PRESIDENTE

SECRETARIA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
XXV LEGISLATURA
22 OCT 2026
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROCESOS
PARLAMENTARIOS

APROBADO EN VOTACION NOMINAL CON
18 VOTOS A FAVOR
0 VOTOS EN CONTRA
0 ABSTENCIONES

DICTAMEN No. 31 DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO A LA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA EN FECHA 01 DE AGOSTO DE 2025.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de reforma al artículo 218 del Código Penal para el Estado de Baja California, presentada por la Diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, por lo que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 122 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión desarrolló sus trabajos conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado denominado **"Fundamento"** se enuncian las disposiciones normativas que determinan la función, facultades y atribuciones de esta Comisión Dictaminadora.

II. En el apartado denominado **"Antecedentes Legislativos"** se da cuenta del trámite recaído a la iniciativa materia del presente dictamen.

III. El apartado denominado **"Contenido de la Reforma"** se compone de dos capítulos, el primero denominado **"Exposición de motivos"** en el que se hace una transcripción de la motivos, fundamentos y razones que impulsaron a la legisladora. Por su parte el capítulo denominado **"Cuadro Comparativo"** se presenta de manera esquemática el articulado propuesto.

IV. En el apartado denominado **"Análisis de constitucionalidad"** se realiza un estudio de constitucionalidad y procedencia legal, independientemente de su viabilidad y necesidad.

V. En el apartado de **"Consideraciones Jurídicas"** las y los integrantes de este órgano colegiado expresan los razonamientos jurídicos y argumentos que orientan el sentido del presente dictamen.

VI. En el apartado de **"Propuestas de modificación"** se describe puntualmente las adiciones, modificaciones o eliminaciones de porciones normativas que esta dictaminadora considere susceptible de ser incorporadas al resolutivo.

VII. En el apartado de **"Régimen Transitorio"** se describen puntualmente las disposiciones de naturaleza transitoria que esta dictaminadora considera susceptibles de ser incorporadas al resolutivo.

VIII. En el apartado denominado **"Impacto Regulatorio"** se enuncian los ordenamientos legales que, dado el caso, deben ser armonizados para reflejar y dar cumplimiento a la propuesta contenida en el presente dictamen.

IX. En el apartado denominado **"Resolutivo"** se vierte el sentido orientador del presente dictamen, respecto a las porciones normativas que fueron encomendadas a esta Comisión.

I. Fundamento.

De conformidad con lo establecido por los artículos 39, 55, 56 fracción VII, 57, 60, 90, 122, 123, 124 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión de Justicia, es competente para emitir el presente Dictamen, por lo que en ejercicio de sus funciones procede al análisis, valoración y determinación de la propuesta legislativa que nos ocupa.

II. Antecedentes Legislativos.

1. En fecha 01 de agosto de 2025, la Diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante Oficialía de Partes de esta Soberanía, iniciativa que reforma el artículo 218 del Código Penal para el Estado de Baja California.

3. La Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, mediante oficio 004616 fechado el 15 de agosto de 2025, dio curso legal a las iniciativas mencionadas, tal como lo dispone el artículo 50 fracción II inciso f de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

3. Mediante oficio XXV-AP-351-2025, signado por la Diputada Presidenta de la Comisión de Justicia, el cual fue recibido en la Dirección de Consultoría Legislativa el 19 de agosto de 2025, se instruyó a dicho órgano técnico para que procediera a elaborar el proyecto de Dictamen correspondiente, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 80 BIS de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se actuó en consecuencia, conforme y en los términos del presente instrumento.

III. Contenido de la Reforma.

Señala la inicialista en su exposición de motivos los siguientes planteamientos y argumentos para motivar su propuesta:

> El fraude es uno de los delitos patrimoniales de mayor incidencia en el país y particularmente en Baja California. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2024 se registraron más de 6,200 carpetas de investigación por fraude en la entidad, colocándose como uno de los cinco delitos patrimoniales más denunciados.
>
> Este tipo penal afecta directamente la economía de las personas, causando pérdidas materiales que, en ciertos sectores de la población, pueden tener consecuencias graves e irreversibles. Tal es el caso de personas en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, personas adultas mayores o con alguna discapacidad, quienes por su condición son más susceptibles de ser víctimas de engaños dolosos.
>
> Al respecto, diversos estudios nacionales e internacionales han documentado que los grupos vulnerables son blanco frecuente de fraudes, en modalidades como esquemas piramidales, falsos servicios de salud, estafas por teléfono o redes sociales, entre otros.
>
> En Baja California, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor recibió más de 300 quejas relacionadas con posibles fraudes financieros en perjuicio de personas mayores durante 2023.

La inclusión de una agravante en el tipo penal del fraude para estos casos es una medida con sustento en el principio de equidad, que busca brindar mayor protección a quienes tienen menores herramientas de defensa ante delitos de naturaleza patrimonial y engañosa.

Las cifras revelan una tendencia preocupante. En el periodo 2020-2024, los fraudes cometidos a través de medios digitales en Baja California crecieron más del 45 %, según datos del Centro Estatal de Inteligencia. Dentro de este grupo, los adultos mayores fueron el segundo sector más afectado, especialmente en Tijuana, Ensenada y Mexicali.

Asimismo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó que más del 35 % de las reclamaciones por fraudes bancarios a nivel nacional en 2023 provinieron de personas mayores de 60 años, muchas de las cuales señalaron haber sido inducidas a error mediante engaños telefónicos o digitales.

A pesar del aumento de estos casos, el Código Penal vigente en Baja California no contempla una agravante específica que reconozca la especial vulnerabilidad de estas personas, dejando un vacío legal que esta reforma viene a subsanar.

Desde una visión de derechos humanos, es imprescindible que la ley penal no solo castigue, sino también sirva como instrumento de protección efectiva. Esta reforma incorpora la perspectiva del enfoque diferenciado, reconociendo que no todas las víctimas se encuentran en igualdad de condiciones ante un delito patrimonial.

Por otro lado, también se abre la posibilidad de que, mediante la individualización de la pena, los jueces puedan valorar con mayor precisión el daño y la circunstancia de vulnerabilidad, promoviendo incluso medidas complementarias de justicia restaurativa cuando sea viable.

Adicionalmente, se alinea con la Estrategia Nacional de Acceso a la Justicia para Grupos en Condición de Vulnerabilidad impulsada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas fiscalías estatales.

Cobra relevancia señalar que, estados como Querétaro y la Ciudad de México han legislado en este sentido. En el caso de Querétaro, el Código Penal contempla un incremento de una tercera parte a las penas por fraude cuando se comete contra personas menores, mayores de 60 años o con discapacidad. Esta medida ha permitido una mayor eficacia en la persecución de este tipo de delitos y un reconocimiento formal de la necesidad de proteger a estos grupos.

Es pertinente señalar que, la reforma es congruente con el artículo 1 constitucional, que establece la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos de todas las personas, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, armoniza con los principios de pro persona, interés superior de la niñez, y protección reforzada de las personas con discapacidad.

También es coherente con instrumentos internacionales ratificados por México, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Entre los múltiples impactos positivo de esta reforma, se citan los siguientes:

1. Desincentivar la comisión de fraudes contra personas vulnerables, al establecer consecuencias penales más severas.

2. Reforzar el marco jurídico de protección a niñas, niños, personas mayores y con discapacidad.

3. Ofrecer herramientas más eficaces a las fiscalías y jueces para individualizar correctamente las penas.

4. Contribuir a una cultura de justicia más incluyente y sensible a los derechos humanos.

(ofrece cuadro comparativo)

Esta propuesta no pretende elevar de forma desproporcionada las penas, sino reconocer una circunstancia agravante basada en la desigualdad real de condiciones entre la persona que defrauda y la víctima vulnerable. Se trata de una medida justa, proporcional y necesaria para avanzar hacia un sistema penal más equitativo, inclusivo y garantista de los derechos fundamentales.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos señalados, me permito someter a consideración de este H. Congreso del Estado de Baja California, la siguiente:

INICIATIVA QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

B. Cuadro Comparativo.

Con la finalidad de ilustrar las modificaciones específicas que proponen las iniciativas, a continuación, se presentan los cuadros comparativos correspondientes:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TEXTO ACTUAL	TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 218.- Tipo y punibilidad.- Comete el delito de fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halle, se hace ilícitamente de una cosa o alcanza un lucro indebido.	**ARTÍCULO 218.-** (...)
El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:	(...)
I.- Con prisión de tres meses a tres años y hasta cien días multa cuando el valor de lo defraudado no exceda de ochocientas veces el salario.	I a la II.- (...)
II.- Con prisión de cuatro a nueve años y hasta quinientos días multa, si el valor de lo defraudado fuere mayor de ochocientas veces el salario.	**Cuando el delito se cometa en perjuicio de una persona menor de edad, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, las penas que correspondan se aumentarán en una tercera parte.** **Para efectos del presente artículo, se entiende por persona con discapacidad a quien presente deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente o temporal, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.**

Con el propósito de clarificar aún más la pretensión legislativa, presentamos la siguiente *tabla indicativa* que describe de manera concreta la intención de la propuesta de la inicialista:

INICIALISTA	PROPUESTA	OBJETIVO
Diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas.	Reformar el artículo 218 del Código Penal para el Estado de Baja California.	Incorporar una agravante en el delito de fraude cuando éste se cometa en contra de personas menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad, incrementado la punción punitiva en una tercera parte.

IV. Análisis de constitucionalidad.

Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa, previamente debe estudiarse el marco jurídico constitucional de la materia. La propuesta se ajustó a un análisis objetivo considerando lo siguiente:

1. Debe analizarse su constitucionalidad. Toda norma que pretenda adquirir fuerza de ley debe ser sujeta a una cuestión de constitucionalidad. Se requiere una justificación que venza una sistemática presunción de inconstitucionalidad que debe imponer la y el legislador.

2. No cualquier diferencia al diseño constitucional implica inconstitucionalidad, pero las modificaciones legales deben pretender un objetivo constitucionalmente trascendente y no una finalidad simplemente admisible.

3. El diseño normativo debe privilegiar en lo posible, la libertad de las personas gobernadas. En consecuencia, no deben incluirse más restricciones a la esfera jurídica de la persona gobernada que las que resulten indispensables para la consecución de un fin social superior.

4. Por último, con la finalidad de no generar efectos no deseados, la y el legislador debe vigilar la congruencia normativa. Es preciso analizarse si la construcción gramatical de la porción normativa está efectivamente encaminada al cumplimiento del fin trascedente enunciado en su exposición de motivos.

Considerando lo anterior, se procedió al análisis del proyecto legislativo que nos ocupa.

El punto de partida de este estudio jurídico de constitucionalidad es y debe ser, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto, el artículo 39 de la misma señala que la soberanía del pueblo reside esencial y originalmente en el pueblo, y que este tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

> **Artículo 39.** La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Por su parte, el artículo 40 de nuestra norma fundamental, establece que nuestra República representativa está compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.

> **Artículo 40.** Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Así, nuestra norma fundamental señala que, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, por los Estados y la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores, sin que en ningún caso se pueda contravenir lo que establece la Constitución Federal:

> **Artículo 41.** El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
>
> [...]

Ahora bien, el sistema jurídico mexicano se encuentra cimentado en el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual representa el respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos humanos, además de la prohibición expresa de cualquier tipo de discriminación:

> **Artículo 1o.** En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De manera paralela, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en su artículo 7 establece que, *"El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, y los demás derechos que reconoce esta Constitución, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".*

Por su parte, el artículo 4 de la misma Constitución Local, establece que Baja California es libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las señaladas por la Constitución Federal. Mientras que el diverso numeral 5 precisa que *"Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste".*

El artículo 11 de nuestra Constitución Local establece la división de poderes, de la siguiente manera: *"El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el Legislativo, el*

Ejecutivo y el Judicial, los cuales actúan separada y libremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado."

Además de lo anterior, el artículo 13 de nuestra Carta Local establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una Asamblea de representantes del pueblo, que se denomina Congreso del Estado.

Mientras que el artículo 27 fracción I de la Constitución Local establece con claridad que el Congreso del Estado tendrá facultad para *"Legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así como participar en las reformas a esta Constitución, observando para el caso los requisitos establecidos"*.

Analizado lo anterior como ha sido, esta Comisión advierte de manera clara que las propuestas legislativas motivo del presente Dictamen, tienen bases y soportes constitucionales previsto en los artículos 1, 4, 14, 16, 39, 40, 41, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación directa a los numerales 4, 5, 11, 13 y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, por lo que el análisis de fondo respecto a la viabilidad de las propuestas legislativas, será atendido en el apartado siguiente.

V. Consideraciones y fundamentos.

1. La Diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, presenta iniciativa de reforma al artículo 218 del Código Penal para el Estado de Baja California, con la finalidad de establecer una agravante en el delito de fraude cuando éste se cometa en contra de personas menores de dieciocho años, personas adultas mayores o personas con discapacidad, incrementado la respuesta punitiva en una tercera parte según corresponda a la hipótesis que se actualice.

2. En su exposición de motivos, la inicialista destaca que el delito de fraude constituye una de las conductas patrimoniales de mayor incidencia tanto a nivel nacional como en nuestro Estado, destacando el incremento sostenido de este fenómeno delictivo, particularmente mediante mecanismos digitales y esquemas de engaño dirigidos hacia sectores sociales en condición de vulnerabilidad. Bajo esa perspectiva, refiere que niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, enfrentan condiciones particulares de susceptibilidad frente a este tipo de conductas, derivado de factores asociados a su condición física, cognitiva, social o económica, lo que los coloca en una situación de mayor

riesgo frente a prácticas fraudulentas que afectan directamente su patrimonio, estabilidad y dignidad personal.

Asimismo, la promovente expone que el marco jurídico penal vigente no contempla actualmente una agravante específica que reconozca la especial vulnerabilidad de dichos grupos sociales dentro de la configuración típica del delito de fraude, razón por la cual estima necesario fortalecer la tutela penal mediante una respuesta diferenciada y reforzada por parte del Estado.

A razón de lo anterior la promovente argumenta que la propuesta se sustenta en los principios constitucionales y convencionales de protección reforzada, el interés superior de la niñez, pro persona y el enfoque diferenciado de personas adultas mayores y personas con discapacidad, señalando que la reforma pretende contribuir a una justicia más incluyente, equitativa y sensible a los derechos humanos, permitiendo a las autoridades jurisdiccionales contar con mayores herramientas para individualizar la sanción conforme a las condiciones específicas de vulnerabilidad de la víctima.

Propuesta legislativa que fue hecha en los siguientes términos:

ARTÍCULO 218.- (...)

(...)

I a la II.- (...)

Cuando el delito se cometa en perjuicio de una persona menor de edad, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, las penas que correspondan se aumentarán en una tercera parte.

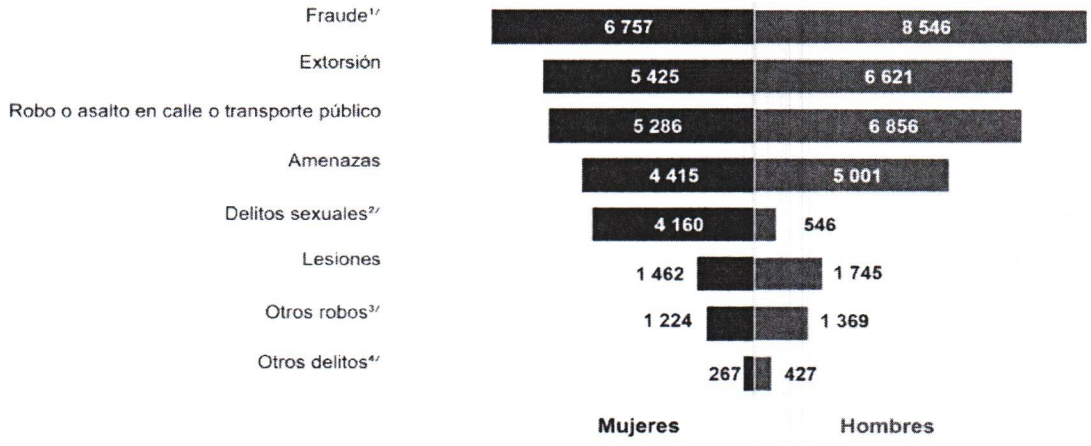
Para efectos del presente artículo, se entiende por persona con discapacidad a quien presente deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente o temporal, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.

3. El fenómeno del fraude constituye actualmente una de las expresiones delictivas de mayor impacto patrimonial en México, no sólo por la frecuencia con la que se actualiza, sino por la transformación de sus modalidades comisivas, particularmente a partir del uso de herramientas digitales, plataformas financieras, llamadas telefónicas, redes sociales y

esquemas de engaño que permiten afectar el patrimonio de las personas sin necesidad de contacto físico directo entre víctima y victimario. En ese sentido, el fraude ha dejado de ser únicamente una conducta patrimonial tradicional para convertirse en una manifestación delictiva de alta adaptabilidad, capaz de reproducirse en espacios comerciales, bancarios, familiares, digitales y comunitarios, generando afectaciones económicas, emocionales y de confianza social.

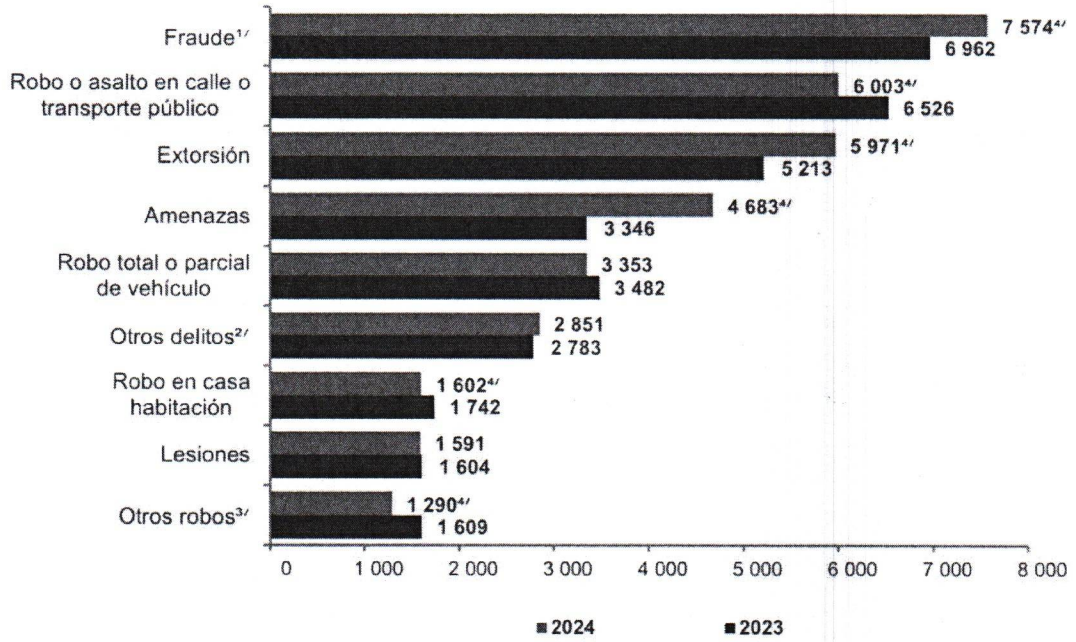
La evidencia estadística nacional confirma la relevancia de este fenómeno. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2024 se estimaron 33.5 millones de delitos en el país, con una tasa de 34,918 delitos por cada 100 mil habitantes; dentro de ese universo, el fraude fue identificado como el delito más frecuente, con una tasa de 7,574 eventos por cada 100 mil habitantes, por encima del robo o asalto en calle o transporte público y de la extorsión.

Gráfica 1
Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, según tipo de delito y sexo de la víctima
2024



Nota: Al presentar la tasa de delitos según sexo de la víctima, se excluyen los delitos del hogar: *robo total o parcial de vehículo* y *robo a casa habitación*. En estos casos, todas y todos los integrantes del hogar son víctimas, sin hacer distinción de sexo o edad.
1/ Incluye *fraude bancario* y *fraude al consumidor*.
2/ Incluye delitos sexuales como *hostigamiento o intimidación sexual, manoseo, exhibicionismo, intento de violación* y *violación sexual*.
3/ Se refiere a robos distintos *de robo o asalto en la calle o en el transporte, robo total o parcial de vehículo* y *robo en casa habitación*.
4/ Incluye delitos como *secuestro o secuestro exprés* y *otros delitos*.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2025.

Gráfica 5
Delitos por cada 100 mil habitantes, según tipo
2023 y 2024
(delitos)



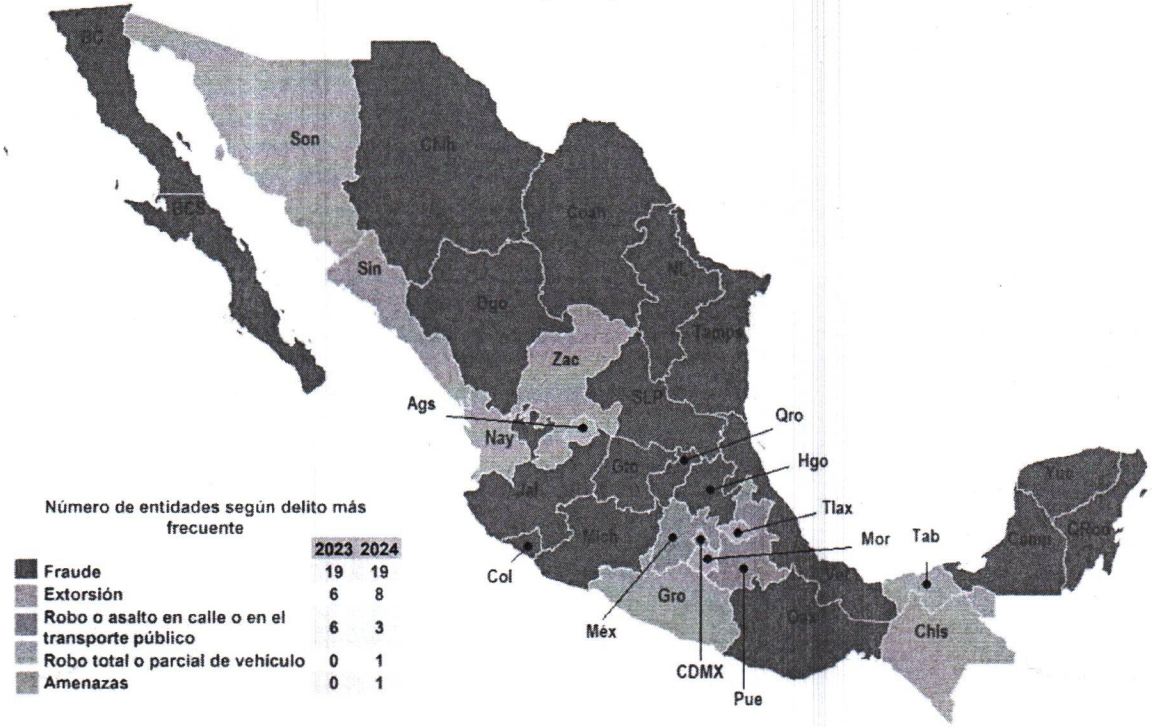
1/ Incluye *fraude bancario* y *fraude al consumidor*.
2/ Incluye delitos como *secuestro o secuestro exprés*, *delitos sexuales* y *otros delitos*.
3/ Se refiere a robos distintos de *robo o asalto en la calle o en el transporte*, *robo total o parcial de vehículo* y *robo en casa habitación*.
4/ Cambio estadísticamente significativo con respecto al año anterior.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2024 y 2025.

Cuadro 3
Distribución porcentual de delitos, según tipo
2024

Tipo de delito	%
Fraude1/	21.7
Robo o asalto en calle o transporte público	17.2
Extorsión	17.1
Amenazas	13.4
Robo total o parcial de vehículo	9.6
Otros delitos2/	8.2
Robo en casa habitación	4.6
Lesiones	4.6
Otros robos3/	3.7

1/ Incluye *fraude bancario* y *fraude al consumidor*.
2/ Incluye delitos como *secuestro o secuestro exprés*, *delitos sexuales* y *otros delitos*.
3/ Se refiere a robos distintos de *robo o asalto en la calle o en el transporte*, *robo total o parcial de vehículo* y *robo en casa habitación*.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2025.

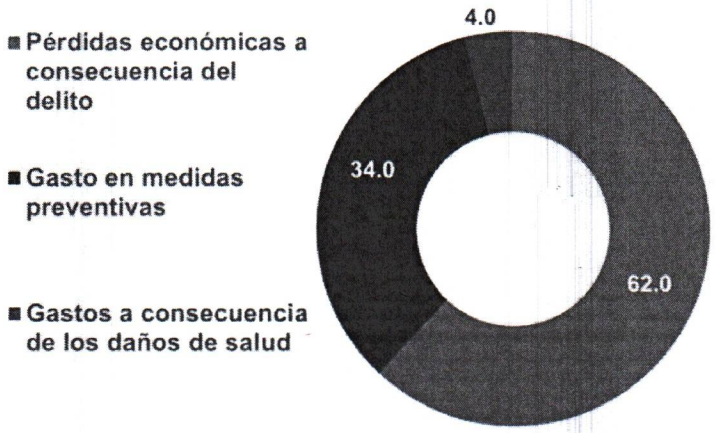
Mapa 1
Delito más frecuente por entidad federativa
2024
(delitos)



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2025.

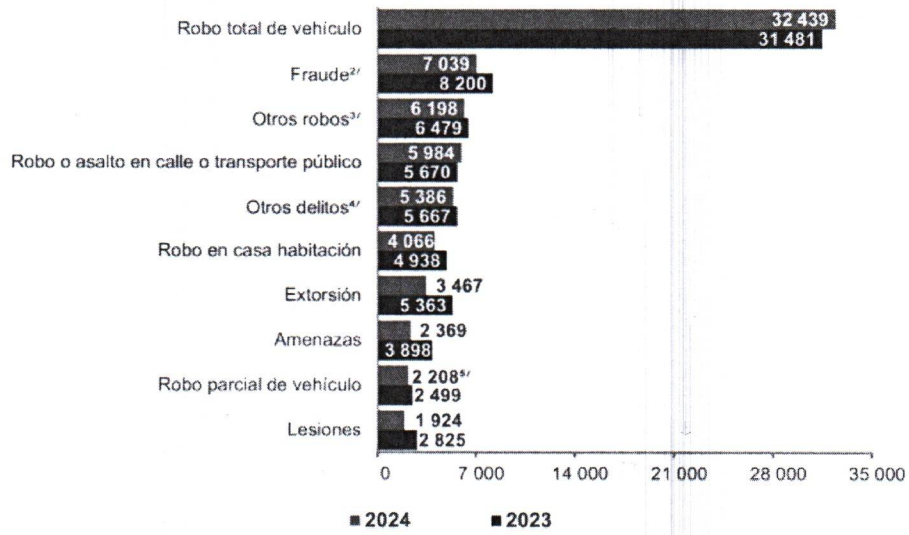
Estos datos resultan particularmente relevantes para el caso que nos ocupa, pues permite advertir con claridad que la conducta materia de la iniciativa no constituye un fenómeno aislado ni marginal dentro de la incidencia delictiva, sino una de las formas de criminalidad patrimonial más recurrentes en el país. Además, la propia Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 refiere que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares ascendió a 269.6 mil millones de pesos, lo que evidencia que los delitos patrimoniales no sólo lesionan bienes jurídicos individuales, sino que producen impactos económicos agregados que afectan la estabilidad de los hogares y la percepción general de seguridad.

Gráfica 9
Porcentaje del costo del delito por tipo
2024



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2025.

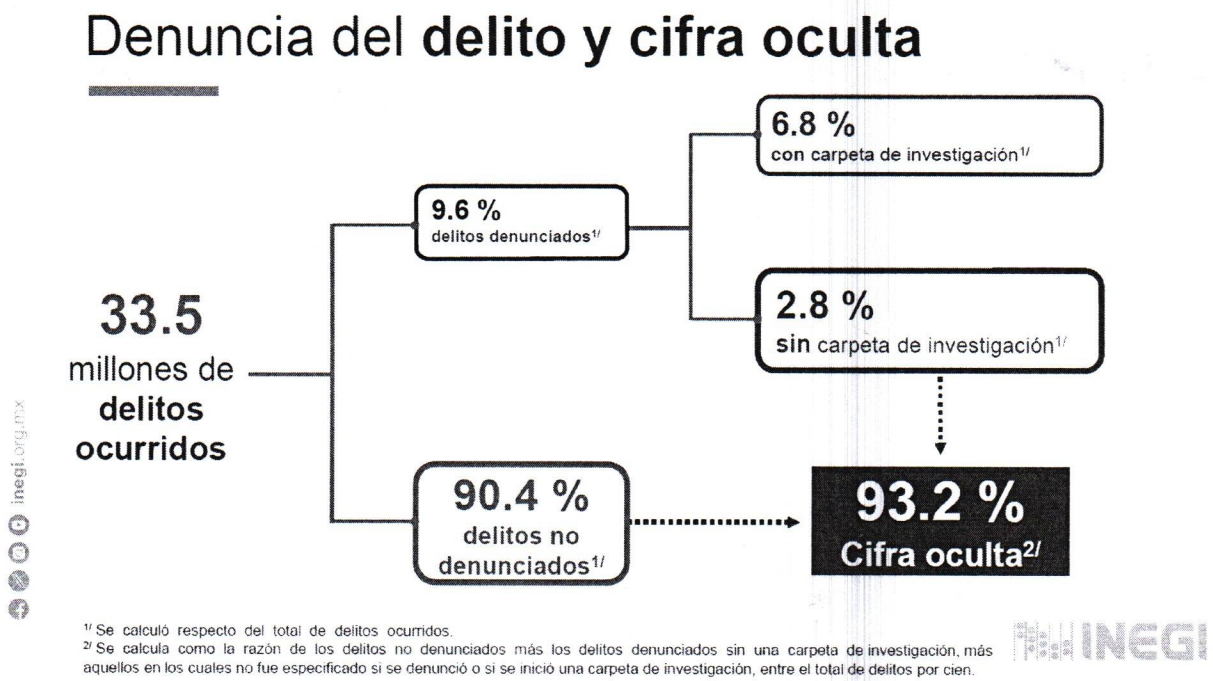
Gráfica 11
Pérdidas monetarias promedio anuales a consecuencia del delito[1/]
2023 y 2024
(pesos)



Nota: Pesos a precios de la segunda quincena de 2018.
1/ Se refiere a las pérdidas monetarias totales por tipo de delito entre el número de personas que fueron víctimas de dichos delitos.
2/ Incluye *fraude bancario* y *fraude al consumidor*.
3/ Incluye *carterismo, allanamientos, abigeato* y *otros tipos de robo*.
4/ Incluye delitos como *secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales, daño en propiedad ajena* y *otros delitos*.
5/ Cambio estadísticamente significativo con respecto al año anterior.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2024 y 2025.

En el caso particular de Baja California, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 estimó que el fraude representó una tasa de 7,978 delitos por cada 100 mil habitantes durante 2023, dato que coloca a esta conducta como una manifestación delictiva relevante dentro de la realidad local. Asimismo, dicha encuesta estimó 863,527 delitos en la entidad, de los cuales en el 81% de los casos la víctima manifestó haber sufrido algún daño, y dentro de éstos, el 56.2% correspondió a daño económico; además, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares bajacalifornianos se estimó en 8.7 mil millones de pesos.

Aunado a lo anterior, la información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California[1] precisa que la incidencia delictiva registrada corresponde a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado mediante Número Único de Caso, y reconoce este indicador como fundamental para medir y analizar la situación delictiva en el ámbito estatal, municipal y local, no obstante a que los indicadores de la ***"cifra oculta"*** por ***delitos no denunciados***, es verdaderamente alarmante:



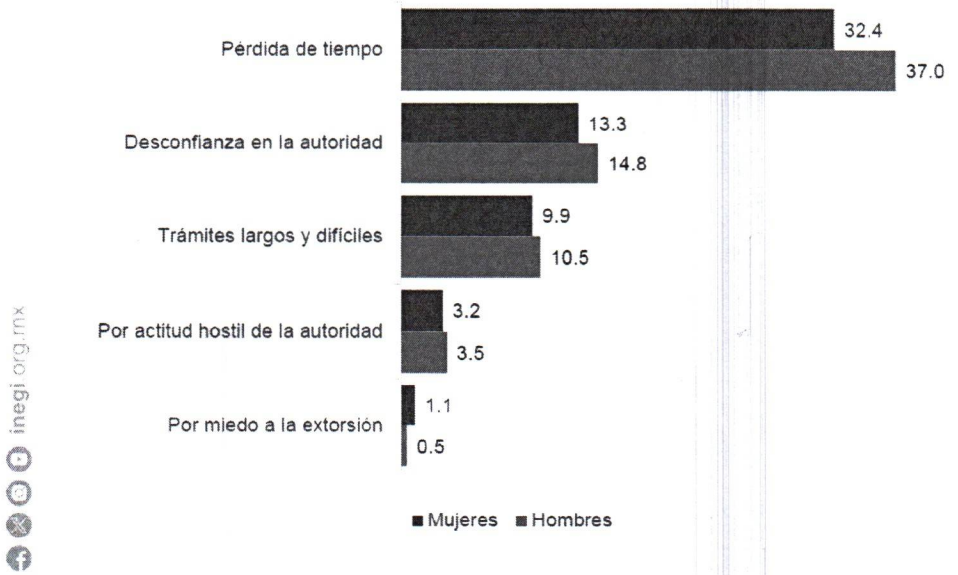
[1] https://www.seguridadbc.gob.mx/contenidos/incidenciaDelictiva.php

Cuadro 7
Cifra oculta, según tipo de delito
2023 y 2024
(porcentaje)

Tipo de delito	2023	2024
Secuestro	95.2	98.1
Extorsión	96.7	97.0
Fraude[1/]	97.0	96.7
Otros delitos[2/]	95.7	96.1
Robo o asalto en calle o transporte público	93.7	94.2
Robo parcial de vehículo	93.7	94.1
Amenazas	88.1	91.0[4/]
Robo en casa habitación	90.4	89.7
Otros robos[3/]	90.9	89.6
Lesiones	87.9	86.5
Robo total de vehículo	39.7	35.7

1/ Incluye *fraude bancario* y *fraude al consumidor*.
2/ Se compone por *violación* sexual (87.5 %), *hostigamiento o intimidación sexual* (98.1 %) y *otros delitos* (83.5 %).
3/ Se refiere a robos distintos de *robo o asalto en la calle o en el transporte, robo total o parcial de vehículo* y *robo en casa habitación*.
4/ Cambio estadísticamente significativo con respecto al año anterior.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2024 y 2025.

Causas de no denuncia atribuibles a la autoridad, según sexo
2024
(porcentaje)



Nota: No se incluyen las cifras de no especificado.

La ***"pérdida de tiempo"*** es la principal causa de no denunciar, la segunda es la ***"desconfianza en la autoridad"*** aun así, al contrastar la información estadística oficial se advierte que el fraude debe ser analizado en sede legislativa con especial cuidado, pues al tratarse de una conducta que frecuentemente se desarrolla mediante engaño, manipulación o aprovechamiento de condiciones personales de la víctima, puede presentar situaciones que queden invisibilizadas lo que agrava la situación de grupos vulnerables.

Regresando al núcleo central de la reforma (ponderar a personas menores de dieciocho años, personas adultas mayores o personas con discapacidad cuando sean víctimas del delito de fraude) consideramos que el análisis de la iniciativa no puede reducirse únicamente a una valoración abstracta de técnica penal, sino que debe realizarse desde una perspectiva constitucional de ***protección reforzada***. Ello es así porque la propuesta coloca en el centro de la acción legislativa a tres sectores sociales respecto de los cuales el Estado mexicano tiene deberes específicos de protección: niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; y personas adultas mayores. En todos estos casos, el orden jurídico nacional e internacional reconoce que **no basta con una igualdad formal ante la ley**, sino que resulta necesario adoptar medidas diferenciadas que permitan equilibrar condiciones reales de desventaja, prevenir abusos y reforzar la tutela efectiva de sus derechos.

Por lo que hace a niñas, niños y adolescentes, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del ***interés superior de la niñez***, garantizando de manera plena sus derechos. Este mandato no opera únicamente como una cláusula programática, sino como un parámetro obligatorio de actuación legislativa, administrativa y jurisdiccional, que exige orientar el diseño normativo hacia la protección más amplia de la infancia y adolescencia. En armonía con ello, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a este grupo como titular de derechos y obliga a las autoridades a garantizar su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 4. (...)

[...]

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

[...]

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:

I. Garantizar un enfoque integral, transversal, con perspectiva de género y de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez;

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia, en los que se incorporen datos desagregados al menos por sexo, edad, discapacidad, condición económica y origen étnico, para evaluar el impacto diferenciado de sus acciones en estos grupos de atención prioritaria, y

IV. Todas las autoridades competentes en la materia, deberán cursar y aprobar los programas de formación y capacitación con perspectiva de género y derechos humanos.

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias,

deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislatura de la Ciudad de México, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.

Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes.

En cuanto a las personas con discapacidad, la **CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**[2] impone a los Estados parte la obligación de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. Este deber convencional adquiere especial relevancia en materia penal, pues cuando una conducta patrimonial se dirige contra una persona que enfrenta barreras físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, el reproche jurídico no se agota en la afectación económica, sino que se agrava por el aprovechamiento de una condición de desventaja que puede limitar sus posibilidades reales de defensa, comprensión o reacción frente al engaño.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 4 Obligaciones generales

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

[2] https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;

[...]

Respecto de las personas adultas mayores, la **CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES**[3] reconoce expresamente su derecho a la seguridad, a una vida sin violencia, a recibir un trato digno y a ser respetadas y valoradas. Desde esta perspectiva, el fraude cometido en su perjuicio no sólo representa una afectación patrimonial, sino una conducta que puede comprometer su autonomía, estabilidad económica, patrimonio acumulado, tranquilidad personal y condiciones materiales de vida, razón por la cual el Estado se encuentra constitucional y convencionalmente habilitado para establecer medidas legislativas diferenciadas que refuercen su protección, valores que son recogidos en la **LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.**

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de:

[3] https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_a70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf

I. La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores;

II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y

(...)

Artículo 4o. Son principios rectores en la observación y aplicación de esta Ley:

I. Autonomía y autorrealización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas mayores orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo personal y comunitario;

[...]

V. Atención preferente. Es aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores, y

VI. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. De la integridad, dignidad y preferencia:

a. A una vida con calidad. Es obligación de las Instituciones Públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho.

b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que ésta y otras leyes consagran.

c. A una vida libre sin violencia.

d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual.

e. A la protección contra toda forma de explotación.

f. A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales.

g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos.

II. De la certeza jurídica:

a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados.

b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos.

c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario.

d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.

[...]

En mérito de lo anterior, las Diputadas y Diputados que integramos esta Comisión advertimos que la agravante propuesta por la inicialista encuentra un soporte razonable en el contexto nacional y local del delito de fraude, así como en el deber reforzado del Estado de proteger a grupos sociales que, por su condición etaria, funcional o de desarrollo, pueden enfrentar mayores condiciones de exposición frente a esquemas de engaño patrimonial. Bajo esa lógica, la medida legislativa no se orienta a crear un nuevo tipo penal ni a sancionar nuevamente una conducta ya prevista, sino a reconocer que cuando el fraude se comete contra personas menores de dieciocho años de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad, concurre una circunstancia objetiva que incrementa la gravedad del hecho y justifica una respuesta penal diferenciada.

Ahora bien, desde una perspectiva estrictamente dogmática y de política criminal, resulta necesario precisar que las agravantes constituyen mecanismos normativos mediante los cuales las y los legisladores identifican circunstancias específicas que incrementan el desvalor de la conducta o la magnitud de afectación al bien jurídico tutelado, justificando con ello una consecuencia penal más severa respecto del tipo básico.

En términos generales, la teoría jurídico-penal reconoce que las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal —entre ellas las agravantes— no alteran la existencia del delito ni modifican los elementos esenciales del tipo penal base, sino que operan sobre la punibilidad, permitiendo graduar la respuesta del Estado frente a supuestos en los que concurre una mayor intensidad de reproche jurídico. Así, mientras el tipo básico describe la conducta prohibida, las agravantes identifican elementos adicionales que revelan una mayor peligrosidad de la acción, un incremento en el desvalor del resultado o un contexto especial de vulnerabilidad que intensifica la lesión al bien jurídico protegido.

Bajo esa lógica, la doctrina penal contemporánea ha sostenido que las agravantes encuentran justificación constitucional cuando responden a parámetros objetivos, razonables y proporcionales vinculados con la mayor gravedad del hecho ilícito. El tratadista Claus Roxin explica que las circunstancias agravantes cumplen una función de *individualización legislativa de la pena*, permitiendo que las y los legisladores anticipen supuestos en los que la conducta presenta una lesividad cualificada respecto del injusto básico. En similar sentido, Santiago Mir Puig sostiene que las agravantes responden a un incremento del contenido de injusto o culpabilidad, derivado de circunstancias que hacen más intensa la afectación social o individual provocada por el delito.

En el caso concreto que nos ocupa, la agravante propuesta no se construye a partir de categorías arbitrarias o discriminatorias, sino sobre un elemento plenamente identificable y constitucionalmente relevante: la especial condición de vulnerabilidad de la víctima. Ello implica que el incremento punitivo no deriva simplemente de la calidad personal de quien resiente el delito, sino del mayor reproche que merece quien, mediante engaño o aprovechamiento del error, dirige su conducta contra personas que enfrentan condiciones diferenciadas de protección jurídica y menores posibilidades reales de defensa frente al fraude.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que las y los legisladores cuentan con un amplio margen de configuración en materia penal para definir delitos, punibilidades y circunstancias agravantes, siempre que respete los principios

constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y exacta aplicación de la ley penal. En ese sentido, el Alto Tribunal ha precisado que el principio de igualdad no impide al legislador establecer tratamientos jurídicos diferenciados cuando éstos persiguen una finalidad constitucionalmente válida y descansan en categorías objetivas y razonables.

Sirve de apoyo a lo antes argumentado, los siguientes criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

LEYES PENALES. AL EXAMINAR SU CONSTITUCIONALIDAD DEBEN ANALIZARSE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA.

El legislador en materia penal tiene amplia libertad para diseñar el rumbo de la política criminal, es decir, para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del momento histórico respectivo; sin embargo, al configurar las leyes relativas debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, entre ellos los de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación de las penas no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano, conforme a los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esa razón, el Juez constitucional, al examinar la constitucionalidad de las leyes penales, debe analizar que exista proporción y razonabilidad suficientes entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido, para lo cual debe considerar el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para individualizarla entre un mínimo y un máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena para alcanzar la prevención del delito, así como la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización del sentenciado.

Tesis: P./J. 102/2008	Semanario Judicial de la Federación	Novena Época	Registro digital: 168878
Pleno	Septiembre de 2008	Pag. 599	Jurisprudencia, Constitucional, Penal

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL.

El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se

consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta.

Tesis: P./J. 9/2016 (10a.)	Semanario Judicial de la Federación	Décima Época	Registro digital: 2012594
Pleno	Septiembre de 2016	Pag. 112	Jurisprudencia, Constitucional

IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.

La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de

la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado.

Tesis: 1a./J. 55/2006	Semanario Judicial de la Federación	Novena Época	Registro digital: 174247
Primera Sala	Septiembre de 2006	Pag. 75	Jurisprudencia, Constitucional

En múltiples precedentes, nuestro máximo Tribunal Constitucional ha señalado que en materia penal las y los legisladores pueden incrementar válidamente la respuesta punitiva cuando advierta circunstancias que revelen una mayor afectación social o una tutela reforzada del bien jurídico, particularmente cuando se encuentran involucrados grupos históricamente vulnerables o sujetos de especial protección constitucional.

Desde esa óptica, la agravante propuesta en el delito de fraude no rompe el principio de proporcionalidad penal, sino que precisamente busca materializarlo, pues reconoce que el mismo comportamiento fraudulento produce una afectación cualitativamente distinta cuando recae sobre personas menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad. En estos casos, el engaño patrimonial no sólo impacta el patrimonio económico de la víctima, sino también su autonomía, seguridad, estabilidad emocional, condiciones materiales de subsistencia y posibilidad real de recuperación frente al daño sufrido.

Además, esta Comisión considera particularmente relevante señalar que la agravante propuesta mantiene plena congruencia con el principio de taxatividad penal previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues describe de manera clara, objetiva y verificable los supuestos normativos que actualizan el incremento punitivo, evitando fórmulas ambiguas o indeterminadas que pudieran generar incertidumbre jurídica.

En consecuencia, las Diputadas y Diputados integrantes de esta Comisión arribamos al convencimiento de que la agravante propuesta satisface los parámetros constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad, taxatividad y tutela reforzada de derechos humanos,

constituyendo una respuesta legislativa legítima frente a modalidades de fraude que evidencian un mayor contenido de injusto derivado del aprovechamiento de condiciones objetivas de vulnerabilidad de la víctima.

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos redefinió el alcance de la función estatal en materia de derechos humanos, al establecer que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Este mandato constitucional no se agota en la actuación jurisdiccional o administrativa, sino que despliega efectos directos sobre la función legislativa, pues el Poder Legislativo constituye uno de los principales órganos de producción normativa del Estado mexicano y, por tanto, uno de los primeros obligados a adecuar el sistema jurídico para asegurar condiciones reales y efectivas de protección a la dignidad humana. Bajo esta lógica, la actividad legislativa no puede concebirse como una facultad neutra o meramente discrecional, sino como un deber constitucional de configuración normativa orientado a fortalecer el parámetro de protección de los derechos fundamentales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las autoridades estatales cuentan con facultades para emitir normas jurídicas que desarrollen, potencien y optimicen la eficacia de los derechos humanos en el orden interno, reconociendo incluso que los órganos legislativos pueden válidamente ampliar sus mecanismos de tutela siempre que ello represente un mayor nivel de protección constitucional[4]. Así, cuando el legislador advierte escenarios de vulnerabilidad, violencia estructural, insuficiencia normativa o afectaciones relevantes a bienes jurídicos fundamentales, surge no sólo la legitimidad constitucional para intervenir legislativamente, sino una verdadera obligación derivada del propio artículo 1 constitucional, en observancia de los principios de progresividad, protección reforzada y maximización de los derechos humanos[5].

En ese sentido, toda reforma legislativa encaminada a fortalecer la tutela de derechos fundamentales encuentra sustento directo en el mandato convencional y constitucional que vincula a todas las autoridades del Estado mexicano. El deber de prevenir violaciones a

---

[4] **NORMAS CONSTITUCIONALES. POR REGLA GENERAL REQUIEREN DE REGULACIÓN A TRAVÉS DE LEYES SECUNDARIAS, SIN QUE EL LEGISLADOR PUEDA APARTARSE DEL ESPÍRITU DE AQUÉLLAS.**
Registro digital: 163081 Tesis: 2a. CXXIX/2010

[5] **NORMAS DE DERECHO INTERNO. SU INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEBEN ARMONIZARSE NECESARIAMENTE CON EL DERECHO INTERNACIONAL CONVENCIONAL.**
Registro digital: 2023266 Tesis: PC.I.A. J/171 A (10a.)

derechos humanos no se satisface únicamente mediante políticas públicas o actuaciones judiciales posteriores al daño, sino también a través de la construcción de marcos normativos eficaces, actualizados y compatibles con la realidad social que permitan al Estado anticiparse a contextos de riesgo y garantizar una protección integral y efectiva de las personas.

En una sociedad constitucional y democrática, el derecho penal no puede permanecer indiferente frente a contextos reales de vulnerabilidad que colocan a determinados sectores de la población en condiciones materiales de mayor exposición frente a conductas que lesionan su patrimonio, dignidad, autonomía y seguridad personal. La función del Poder Legislativo no se agota en la simple reproducción mecánica de tipos penales, sino que implica la obligación permanente de revisar si el sistema jurídico responde adecuadamente a las transformaciones sociales, a las nuevas modalidades delictivas y a las condiciones diferenciadas que enfrentan ciertos grupos históricamente desaventajados. Bajo esa lógica, el principio de igualdad no debe entenderse únicamente desde una dimensión formal, sino desde una perspectiva sustantiva que permita al Estado adoptar medidas legislativas razonables y proporcionales orientadas a equilibrar escenarios de desigualdad real y reforzar la tutela efectiva de los derechos humanos.

Así, quienes integramos esta Comisión consideramos que la reforma sometida a estudio no representa una respuesta simbólica o desproporcionada del poder punitivo, sino una medida legislativa constitucionalmente legítima y socialmente necesaria, encaminada a reconocer que el fraude cometido en perjuicio de personas menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad, produce una afectación cualitativamente distinta que justifica una reacción jurídica diferenciada por parte del Estado. La dignidad humana, la protección reforzada y la justicia material constituyen parámetros que deben orientar la construcción normativa contemporánea, particularmente cuando se trata de grupos respecto de los cuales el orden constitucional y convencional impone deberes específicos de protección. En consecuencia, esta Dictaminadora estima que la propuesta legislativa analizada no sólo resulta compatible con el orden jurídico mexicano, sino que representa un ejercicio legítimo de configuración legislativa orientado a fortalecer el sistema de tutela penal y la protección efectiva de sectores sociales en condición de vulnerabilidad.

Lo anterior resulta apto y suficiente para declarar la procedencia jurídica de la reforma.

4. Una vez resuelto el fondo la iniciativa, esta Comisión de conformidad con las facultades que expresamente nos confiere nuestra Ley Interior y actuando con plenitud de jurisdicción, consideramos necesario realizar un ajuste de ***técnica legislativa*** respecto del texto

originalmente propuesto por la inicialista, específicamente en el párrafo segundo de la reforma, mediante el cual se pretende incorporar una definición normativa de *"persona con discapacidad"* dentro del artículo 218 del Código Penal para el Estado.

Lo anterior obedece a que dicha categoría jurídica ya se encuentra plenamente reconocida y desarrollada en el marco constitucional, convencional y legal especializado aplicable en el Estado mexicano, particularmente en la **CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**, la **LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD** y la legislación local en la materia, instrumentos que contienen parámetros interpretativos suficientemente claros y obligatorios para todas las autoridades. En ese sentido, la incorporación de **una definición autónoma dentro de un tipo penal específico no resulta técnicamente necesaria**, pues el sistema jurídico vigente ya proporciona herramientas normativas suficientes para determinar cuándo una persona se encuentra dentro de dicho supuesto de protección, además que no corresponde al derecho penal hacer tales definiciones.

Desde otro ángulo de valoración jurídica, tomando en consideración la perspectiva de técnica legislativa y congruencia normativa, la reproducción parcial de conceptos desarrollados en instrumentos especializados puede generar riesgos de desarmonización futura, particularmente ante eventuales reformas constitucionales, convencionales o legales que modifiquen, amplíen o actualicen el alcance conceptual de la discapacidad. Aunado a ello, debe considerarse que el derecho penal se encuentra regido por principios de estricta legalidad y taxatividad, por lo que la incorporación de fórmulas diferenciadas o paralelas podría abrir espacios interpretativos innecesarios respecto de una categoría jurídica que ya cuenta con desarrollo normativo consolidado en el sistema jurídico mexicano.

Asimismo en lo relativo al empleo de la expresión "menor de edad", esta comisión estima oportuno utilizar "persona menor de dieciocho años de edad", tal y como se ha venido actualizando nuestro ordenamiento penal.

En mérito de lo anterior, estimamos jurídicamente procedente conservar únicamente la agravante propuesta por la inicialista, suprimiendo el párrafo definitorio relativo a la discapacidad, al considerar que dicha calidad deberá interpretarse y acreditarse conforme al marco constitucional, convencional y legal especializado vigente en la materia, preservando con ello la coherencia sistemática del orden jurídico y una mejor técnica de configuración legislativa penal; quedando de la siguiente manera:

ARTÍCULO 218.- (...)

(...)

I a la II.- (...)

Cuando el delito se cometa en perjuicio de una persona menor de dieciocho años de edad, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, las penas que correspondan se aumentarán en una tercera parte.

Lo que se verá reflejado en el resolutivo del presente Dictamen.

Lo anterior no altera de forma alguna la pretensión original de la autora, por el contrario, da mayor coherencia temática y normativa, respetando la esencia y valores que se pretenden tutelar con la reforma.

Sirva como argumento, el siguiente criterio jurisprudencial, emanado del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE.

La iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley,

lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas modificaciones al proyecto.

Tesis: 1a./J. 32/2011	Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta	Novena Época	Registro digital: 162318
Primera Sala	Tomo XXXIII, Abril de 2011	Pag. 228	Jurisprudencia, Constitucional

5. El presente Dictamen cubrió el principio de exhaustividad del estudio, al haber analizado todas y cada una de las consideraciones y motivaciones hechas valer por la inicialista.

Es por todo lo anterior que tomando en cuenta los argumentos anteriormente vertidos, el texto propuesto por la inicialista, resulta acorde a derecho, no se contrapone con ninguna disposición de orden federal o local, no contraviene el interés público y existe simetría entre el diagnóstico presentado en la exposición de motivos y los valores jurídicos y axiológicos que se pretenden tutelar con la reforma, lo que hace a la misma, jurídicamente PROCEDENTE, en los términos señalados en el presente Dictamen.

VI. Propuestas de modificación.

Han quedado debidamente justificados y detallados en el considerando 4 del presente Dictamen, mismo que se ilustran a continuación:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TEXTO PROPUESTO POR LA INICIALISTA	TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
ARTÍCULO 218.- (...) (...)	**ARTÍCULO 218.-** (...) (...)

I a la II.- (...) **Cuando el delito se cometa en perjuicio de una persona menor de edad, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, las penas que correspondan se aumentarán en una tercera parte.** ~~**Para efectos del presente artículo, se entiende por persona con discapacidad a quien presente deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente o temporal, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.**~~	I a la II.- (...) **Cuando el delito se cometa en perjuicio de una persona menor de dieciocho años de edad, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, las penas que correspondan se aumentarán en una tercera parte.**

VII. Régimen Transitorio.

Es adecuado el aparrado transitorio propuesto.

VIII. Impacto Regulatorio.

No es necesario armonizar otros ordenamientos legislativos.

IX. Resolutivo.

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión de Justicia, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto:

RESOLUTIVO

ÚNICO. Se aprueba la reforma al artículo 218 del Código Penal para el Estado de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 218.- (...)

(...)

I a la II.- (...)

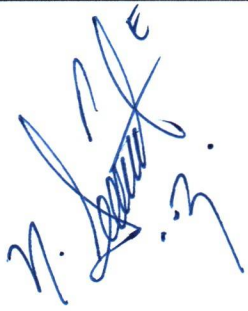
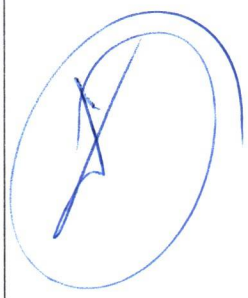
Cuando el delito se cometa en perjuicio de una persona menor de dieciocho años de edad, una persona adulta mayor o de una persona con discapacidad, las penas que correspondan se aumentarán en una tercera parte.

ARTÍCULO TRANSITORIO

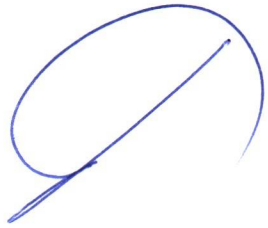
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Dado en sesión de trabajo a los 14 días del mes de octubre de 2026.
"2026, Año de la Educación para la Construcción de la Paz"

COMISIÓN DE JUSTICIA
DICTAMEN No. 31

DIPUTADO / A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. NORMA ANGÉLICA PEÑALOZA ESCOBEDO P R E S I D E N T A			
DIP. ADRIÁN HUMBERTO VALLE BALLESTEROS S E C R E T A R I O			
DIP. JAIME EDUARDO CANTÓN ROCHA V O C A L			
DIP. JUAN DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA V O C A L			

COMISIÓN DE JUSTICIA
DICTAMEN No. 31

DIPUTADO / A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. GABRIELA PONCE VELAZQUEZ V O C A L			
DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA V O C A L			
DIP. JESÚS DANIEL RAZO CORDOVA V O C A L			

DICTAMEN No. 31 AGRAVANTE DE FRAUDE TRATÁNDOSE DE ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

DCL/HICM/IGL/DACM*